

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL MODIFICADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD NO ARMADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

EXPEDIENTE A/SER-004779/2022

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Mediante Orden de fecha 8 de agosto de 2022 de la extinta Consejería de Transportes e Infraestructuras se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares que habían de regir la adjudicación y ejecución del contrato de referencia, el expediente de contratación con Presupuesto Base de Licitación de 748.774, 86 euros.

SEGUNDO. - Con fecha 31 de marzo de 2023 se formalizó el contrato de servicios denominado "SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD NO ARMADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS (actualmente denominada Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras), adjudicado RSG SEGURIDAD Y PROTECCION S.L, por un importe de 736.729,80€, IVA incluido. euros (IVA incluido) y plazo de ejecución 24 meses, siendo el periodo de vigencia del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2025.

TERCERO. - Por Orden de Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de fecha 20 de marzo de 2025 fue aprobada prórroga del contrato por un importe de 736.729,80 euros (base imponible 608.867,60 euros, IVA presupuestario 127.862,20 euros), siendo la fecha de finalización el 31 de marzo de 2027.

CUARTO. - Con fecha 19 de mayo de 2025, la Subdirección General de Análisis y Organización ha efectuado propuesta de modificación del contrato de servicios basada en la concurrencia de los supuestos previstos el artículo 203 y 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de conformidad con el apartado 22 de la cláusula 1, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

QUINTO. - Con fecha 27 de mayo de 2025 se ha dictado orden de inicio del procedimiento y el día 28 de mayo de 2025, el contratista no manifiesta su disconformidad.

SEXTO. En fecha 4 de junio de 2025, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid emite informe favorable al expediente de modificación del contrato.

SÉPTIMO. Según informe de la Intervención Delegada de esta Consejería, de fecha 12 de junio de 2025, al no derivarse de la modificación del contrato derechos y obligaciones de contenido económico para la Administración de la Comunidad de Madrid, no requiere fiscalización previa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 82 y siguientes de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y en los artículos 9 y 10 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

A) RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

PRIMERO. - El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

SEGUNDO. - El artículo 203 de la LCSP dispone que “los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección...”

La propuesta de la Subdirección General de Análisis y Organización de fecha 19 de mayo de 2025, señala como razones de interés público que al objeto de garantizar la continuidad de la prestación de un servicio público básico y esencial y debe tenerse en cuenta que el servicio de vigilancia no armada en las sedes de la Consejería es un servicio esencial del que no puede prescindirse por lo que es necesaria la modificación para la reubicación de un puesto de vigilancia.

TERCERO. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de servicios, en el apartado 22 de la cláusula 1, prevé la posibilidad de llevar a cabo modificaciones en el contrato, estableciendo como condiciones en que podrán efectuarse:

1. Modificación de la adscripción de las dependencias propias de la Consejería.
2. Reagrupación o traslado de cualquiera de las unidades adscritas a esta Consejería.
3. Modificación en los horarios de apertura y cierre, o en el número de horas de prestación del servicio en los edificios adscritos a la Consejería, derivadas de:
 - Cumplimiento de instrucciones sobre racionalización del gasto en las Administraciones.
 - Elevación del nivel de alerta en seguridad ciudadana.
 - Cualquier otra causa relacionada con la seguridad

Las modificaciones previstas afectarán tanto al precio del contrato como a las condiciones del servicio prestado con el alcance que se determina a continuación, pero no influirán sobre las características generales del Servicio de Seguridad y Vigilancia, el cual se continuará prestando de la forma descrita en el PPT.

Naturaleza de las modificaciones:

- En el supuesto de que se tengan que introducir modificaciones en el contrato como consecuencia de la modificación de la adscripción de dependencias, o de la reagrupación o traslado de cualquiera de las unidades adscritas a esta Consejería, los cambios podrán afectar a la ubicación de los puestos de vigilancia y protección; al número de puestos de vigilancia y protección; y al número de horas que se requiere para cubrir el servicio (aumentando o disminuyendo).
- En el caso de que haya que introducir modificaciones en el contrato como consecuencia de la modificación en los horarios de apertura y cierre, o en el número de horas de prestación del servicio en los edificios adscritos a la Consejería, los cambios podrán afectar a la configuración de los puestos de vigilancia y protección (aumentando o disminuyendo) y al número de horas que se requiere para cubrir el servicio.

Alcance y límites: Porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar: 20% del precio del contrato.

La propuesta de la Subdirección General de Análisis y Organización de la Secretaría General Técnica indica que se da la causa prevista en el Pliego de Cláusulas para la modificación del contrato, dado que existe la necesidad de reubicar el puesto de vigilancia que se encontraba adscrito a la sede de Orense 58, a partir del 1 de julio de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2027, entre las sedes de Maudes 17 y Orense 60, debido al traslado y reagrupación de los servicios desempeñados en la sede de Orense 58 como consecuencia de la finalización del contrato de arrendamiento sobre dicho inmueble, por lo que no se modifica el número de efectivos necesarios para este contrato.

B) OBJETO DEL MODIFICADO

CUARTO.- Según la propuesta de la Subdirección General de Análisis y Organización de la Secretaría General Técnica de 19 de mayo de 2025, el objeto del modificado consiste en reasignar, a partir del 1 de julio de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2027, los medios personales adscritos a la sede de Orense 58 a las sedes de Maudes 17 y Orense 60, debido a la reubicación del puesto de vigilancia como consecuencia de la finalización del contrato de arrendamiento sobre el inmueble sito en Orense 58, quedando la distribución de la siguiente forma:

En Orense 60:

- 1 puesto de vigilancia todos los días laborables, de lunes a viernes, en horario de 6:45 a 21:45, haciendo un total de 15 horas de trabajo.

En Maudes, 17

- 1 puesto de vigilancia todos los días del año durante 24 horas.
- 1 puesto de vigilancia todos los días laborables, de lunes a viernes, en horario de 07:00 a 13:00h, haciendo un total de 6 horas de trabajo diarias; siendo el total de horas diarias laborables entre ambos puestos de 30 y 24 horas para los festivos.

Además, en estas dos sedes:

- 1 puesto de vigilancia todos los días laborables, de lunes a viernes, en horario de 6:45 a 21:45, haciendo un total de 15 horas de trabajo, de las cuales 7 horas y media se desarrollarían en Orense 60, en horario de 6:45 a 14:15 horas, y 7 horas y media se desarrollarían en Maudes17 en horario de 14:15 a 21:45 horas

La modificación propuesta no supone alteración ni en el precio ni en el plazo de ejecución del contrato.

C) PROCEDIMIENTO

QUINTO. El Dictamen 297/17 de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid establece que “La normativa aplicable al procedimiento de modificación es la vigente en el momento de su incoación (dictámenes162/17, de 20 de abril y 280/17, de 6 de julio)”.

Resulta por tanto aplicable en cuanto a procedimiento de modificación, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).

SEXTO. El artículo 203 de la LCSP, dispone que los contratos administrativos solo podrán modificarse de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 y con las particularidades previstas en el artículo 207.

En su apartado 3 indica este artículo 203 que las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 y deberán publicarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 207 y 63.

SÉPTIMO. El artículo 191 de la LCSP dispone que:

“1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, (interpretación, resolución de dudas, modificación, declaración de responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspensión y resolución) deberá darse audiencia al contratista.

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación:

- a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista.*
- b) Modificaciones de los contratos, cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros”.*

Por tanto, no procedería dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid

OCTAVO. El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas desarrolla el procedimiento para la modificación de los contratos estableciendo:

” Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes:

- 1. Propuesta de la Administración o petición del contratista.*
- 2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco días hábiles.*
- 3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo plazo anterior.*
- 4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación al contratista”.*

El día 4 de junio de 2025 se emite informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

Según informe de la Intervención Delegada de esta Consejería, de fecha 12 de junio de 2025, al no derivarse de la modificación del contrato derechos y obligaciones de contenido económico para la Administración de la Comunidad de Madrid, no requiere fiscalización previa.

D) COMPETENCIA

DÉCIMO. La competencia en materia de contratación le viene atribuida a esta Consejería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en el Decreto 38/2023, de 23 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, en el Decreto 76/2023, de 5 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y en el Decreto 244/2023, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

El órgano de contratación de la Consejería es el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que, mediante Orden de 27 de diciembre de 2023, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 2 de enero de 2024, delegó en la Secretaría General Técnica las competencias en materia de contratación respecto de los contratos promovidos por las unidades administrativas que le estén adscritas, independientemente de su cuantía.

El artículo 5.2 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid dispone que “*Cuando el*

Gobierno autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando sea causa de resolución y la resolución misma, en su caso.”

No procede autorización del Consejo de Gobierno para este modificado de contrato.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, previo informe de la Abogacía general de la Comunidad de Madrid y de la Intervención, ORDENO:

Aprobar la modificación del contrato “CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD NO ARMADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS”, debido a la reubicación del puesto de vigilancia como se indica en el Cuarto fundamento de derecho de este informe.

El contratista debe formalizar la modificación en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción de la notificación de esta orden, a cuyos efectos se le adjunta el contrato para su firma digital.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27.12.2023, BOCM 02.01.2024)
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Firmado digitalmente por: BARCONS MARQUES MARIA TERESA
Fecha: 2025.06.16 11:01